

MENSAJE

PRESENTADO A LA

Asamblea Nacional Constituyente

POR EL CIUDADANO

Mannel Lisandro Barillas,

General de Division y Presidente de
la República de Guatemala.

EL DIA 1.^o DE OCTUBRE DE

1887.

CON SU TRADUCCION EN INGLES.

GUATEMALA.

Señores Diputados:



MOMENTOS extraordinarios presenta la vida de las Naciones en que los programas más alagüeños y los más bellos ideales sucumbirían, si al Poder Ejecutivo no le fuera dado acudir al Soberano para que le preste su apoyo y valiosa cooperación.

La Soberanía como muy bien sabéis, reside en el Pueblo ante el cual todas las autoridades debemos inclinar la frente.

El Soberano delega una parte de su autoridad, y jamás toda ella, en sus representantes, los cuales congregados en Asambleas dictan las leyes.

Los anales de todas las Naciones nos enseñan que, desde la existencia del sistema representativo, los apoderados suelen apartarse de la voluntad de los mandantes y dictar leyes contrarias á los intereses de sus comitentes.

En esta situación se hallaba Guatemala en los dos últimos años.

Las reformas que en 1885 se hicieron á la Constitución, fueron dictadas en horas de agitaciones políticas, y no pudo dominar en todas ellas la calma que requiere una obra de tanta trascendencia.

Las dificultades fueron en aumento por las Legislaturas del año anterior y del presente, las cuales emitieron leyes inconstitucionales é impracticables.

El Poder Ejecutivo no debe ser ilimitado, como no debe serlo ninguna Autoridad constituida.

Pero es preciso que cada uno de los poderes públicos esté investido de las facultades que son indispensables para que ejerza útil y dignamente sus funciones.

Si se arrebata al Poder Ejecutivo la autoridad que necesita para gobernar, su existencia es imposible.

Las Legislaturas á que me refiero nulificaban al Gobierno en todos los ramos, y muy especialmente en el de Hacienda Pública.

Bajo el peso de tantas restricciones me fué imposible salvar el crédito del país y con mucho pesar lo veía precipitarse cada día más en profundos abismos.

Sentí el mal sin poderle aplicar un remedio, porque me hallaba rodeado de obstáculos que me parecían entonces insuperables.

Llegué á comprender que se trataba de que perecieran en el marasmo los efectos de la revolución de 1871, atacando á los hombres de progreso, y haciendo desaparecer de la escena política á los hijos de aquella revolución gloriosa; en cuyo número tengo la honra de hallarme.

Mi situación era penosa y afflictiva.

Soy hijo del pueblo y se me conducía á combatir lo que más favorece al pueblo.

Mis antecedentes, mi familia y cuanto la naturaleza me hace amar pertenecen á la democracia, y todo lo que se hallaba á mi rededor me impelía á herir esa democracia y á recoger los escombros del pulverizado edificio de los treinta años para exhibirlo, como si no fuera fosil de una edad que se ha ido para no volver.

La República tenía conocimiento de situación tan anormal, y en una serie de actas populares se hicieron expresivas y enérgicas manifestaciones contra la mayoría de los Diputados.

La norma, pues, que debía yo seguir me la marcaba el pueblo; pero el Gabinete se oponía á ella y el conflicto continuaba.

Una situación tan violenta no podía ser estable, y siguiendo los impulsos de mi corazón y mi conciencia, hice un cambio completo de Gabinete.

Al organizarse el nuevo Ministerio comprendió que no se podía dar un paso sin que se operara una mudanza radical; desapareciendo disposiciones que impedían marchar adelante y retirándose de los asuntos públicos á los hombres que habían dictado esas disposiciones y que con mano firme las sostenían.

Precisaba proceder con rapidez.

No me era dado dejar en pié todos los elementos de retroceso que se me oponían y aguardar la convocatoria lenta y tardía de una Constituyente siguiendo los trámites que el título séptimo de la Ley Fundamental fija.

Con la fuerza de la razón y el poder de la justicia dicté entonces el Decreto de 26 de junio, por el cual el Poder Ejecutivo asume la autoridad suprema, y sin trámites dilatorios se convocó á la Constituyente deseada.

Confiado en la firmeza de mi Gobierno abandoné por primera vez la Capital, desde que estoy en el mando, para hacer una

visita á los Departamentos de Oriente, y por todas partes recibí demostraciones de aprecio y entusiasmo, pudiendo asegurar que mi viaje fué una perenne ovación.

Hago recuerdos de estos hechos, no por vanidad, sino para que se vea que los pueblos con aquellas ovaciones daban una pública aprobación á mi conducta y, por consiguiente, al Decreto de 26 de junio en virtud del cual eligieron Diputados á esta Asamblea, que hoy se presenta como estrella luminosa en el planetario sistema de las públicas libertades.

Su aparecimiento y la serie de actas populares que pongo delante de vuestros ojos, son una prueba de la sanción que el Pueblo ha dado al Decreto de 26 de junio.

A este Alto Cuerpo debo exponer mi conducta y voy á verificarlo.

Una circular dirigida por el Ministerio respectivo, dió cuenta al Cuerpo Diplomático del acontecimiento á que me refiero, y otra puso aquel suceso en noticia de los otros Gobiernos de Centro-América.

En ambas se aseguró que la Dictadura sería transitoria y que durante ella se observarían fielmente los preceptos de Derecho Internacional y los Tratados vigentes. Tanto los Gobiernos Centro-Americanos como los Señores del Cuerpo Diplomático residente en esta Capital, contestaron de una manera satisfactoria, con excepción del excelentísimo Señor Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, quien se limitó á decir que daría cuenta á su Gobierno, y en seguida aseguró que por entonces no podía reconocer el nuevo régimen.

Casi al mismo tiempo recibí un cablegrama del General Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en que se me comunicaba que México reconocería á todo Gobierno que aceptara el pueblo de Guatemala.

En esto hizo aquel Alto Funcionario homenaje á la Soberanía inmanente que, como muy bien sabéis, consiste en que cada Nación se dé la forma de Gobierno que le plazca, sin que ningún otro pueblo ni Gobierno pueda intervenir en el asunto.

Carecía Guatemala de un funcionario que hiciera oír su voz en México, porque nuestro Ministro en aquella Capital, comprendiendo bien que no sería sostenido por el nuevo Gabinete, no estaba llamado á ser el órgano en quien se tuviera confianza.

Por lo mismo desde el 22 de junio se le envió la carta de retiro y no hay noticia de que la haya presentado.

No era posible enviar á México otro Representante porque la Dictadura no estaba reconocida allá; pero los hechos, más elocuentes que las palabras, pusieron de relieve que el pueblo de Guatemala ha sancionado y sanciona el Decreto de 26 de junio.

Algunas dificultades, más bien de forma que de esencia, se han presentado entre Guatemala y México; pero me es satisfactorio

manifestaros que con la espontánea y amistosa iniciativa del Excelentísimo Señor Ministro Residente del Imperio Alemán en Centro-América, se hizo un arreglo de cuyos detalles daré cuenta en su oportunidad al Poder Legislativo; y hoy el Pabellón Mexicano Os saluda en unión de los Pabellones de todas las Potencias aquí representadas.

Las relaciones de Guatemala con los Estados de América y Europa son gratas y felices y se cultivan con esmero.

Un Ministro ha ido á Washington con el fin de estrechar la amistad que nos liga con los Estados Unidos de América. Me es grato informaros de que fué recibido de la manera más cordial y benévola, como debía esperarse de la hábil política del gran Pueblo, siempre favorable á estas nacionalidades.

Juzgo indispensable una Legación permanente en aquel País, donde hallándose representadas todas las Naciones del Universo, podrá nuestro Ministro ponersé en contacto con aquellas que no tengan Representantes en Guatemala.

Sin embargo de que por el Decreto de 26 de Junio, el Ejecutivo asumió el Poder Supremo de la Nación, se dispuso que los Tribunales de la República continuaran ejerciendo sus funciones con arreglo á las leyes que estaban vigentes el 1.^º de Marzo del presente año.

Pero siendo imposible que el régimen administrativo se sostuviera, hallándose en el Poder Judicial los mismos individuos que en el presente año y en el pasado dictaron la serie de leyes impracticables de que Os he hablado, fué preciso hacer el cambio de personal que veréis en el Decreto número 381.

En ese mismo Decreto se estableció la Sala 5.^ª de la Corte con residencia en Jalapa, por creerse de conveniencia para que la justicia sea administrada pronta y cumplidamente en aquel territorio.

Muchas Naciones civilizadas otorgan indultos en los días que recuerdan los acontecimientos más gloriosos de la Patria.

Esta práctica se conforma con los principios del Derecho Penal moderno, que propenden á la corrección del reo y no á su aniquilamiento.

La esperanza del perdón conduce á los delincuentes á observar buena conducta en sus prisiones, de manera que ellos mismos cooperan con el legislador á la reforma de las costumbres.

Sin embargo, estos indultos no deben dejar impunes los grandes crímenes ni privar de sus derechos á las personas ofendidas.

Animado por estas ideas emitió el Decreto 382 que otorgó indultos á los reos que se encontrasen sujetos á juicio criminal el 30 de junio y 15 de setiembre, con tal que, el castigo que les correspondiese no excediera de arresto mayor.

Siendo la pena más grande, sin exceder del máximo de la re-

clusión correccional, el indulto quedó limitado á la mitad del tiempo de la condena ó á una cuarta parte si el delito tuviese asignada prisión ordinaria.

No se otorgó indulto á los procesados ó condenados que merezcan pena de muerte ó presidio con calidad de retención.

El Ejecutivo se reservó el derecho de otorgar ó negar el perdón según las circunstancias.

Tampoco se otorgó indulto en las causas en que gestione acusador formal, ni en aquellas en que aparezca que el reo ha cometido con anterioridad el mismo ó diferente delito.

Con estas limitaciones creo que el augusto derecho de hacer gracia, llena el fin que los publicistas se proponen, sin degenerar en daño de la sociedad.

Frecuentes son las controversias entre la Iglesia y el Estado en las naciones católicas.

Para salvar en lo posible estas dificultades, Monarcas que se han llamado Cristianísimos, como los de Francia, que se llaman Católicos, como los de España, Fidelísimos como los de Portugal, Apostólicos como los de Austria, se han visto en la necesidad de ordenar que no se publiquen disposiciones de la Autoridad eclesiástica sin el beneplácito de la Autoridad civil.

De acuerdo con las leyes y prácticas de esas naciones, el artículo 92 del Código Penal dispuso que fuese castigado con la pena de arresto mayor ó con multa de trescientos á tres mil pesos, toda persona que sin permiso del Gobierno ejecutare en la República, breves, rescriptos ó despachos de la Curia Romana ó les diere curso ó publicación.

Esta ley no hizo más que, repetir sustancialmente, aunque en diversa forma, lo que antes del Código Penal teníamos establecido y lo que rigió en Guatemala con anterioridad al 30 de junio de 1871.

Pero el Arzobispo Licenciado Don Ricardo Casanova y Estrada quiso establecer una práctica nueva, recopilando disposiciones de la Curia Romana y publicándolas como suyas en edictos impresos fuera de Guatemala.

Esto era una infracción del Artículo 92 del Código Penal.

A fin de no entrar en la controversia Canónica de si los edictos eran reproducción de disposiciones pontificales, ó reglas nuevas dictadas por el Arzobispo, creí conveniente adicionar el artículo citado, agregando que tampoco debería darse curso ni publicarse, bajo ninguna forma, disposiciones emanadas de cualquiera curia eclesiástica.

El Sr. Casanova se negó á prestar obediencia á esta ley y en una nota dirigida al Ministerio de Gobernación, el 2 de Setiembre próximo pasado, que habréis visto impresa, dijo que protesta contra ese Decreto y contra cualquier vejación ó exacción que con pretexto

de aquel se le pretenda imponer considerándolo como un atentado á la propiedad ó á la libertad personal y como un abuso de la fuerza.

Si la Nación no puede dictar las leyes que juzgue convenientes ni constituirse como le plazca, no es independiente.

Si hay en la sociedad hombres que no estén sujetos á las leyes, no hay igualdad.

Si estos hombres además pueden exitar á la rebelión alegando que solo depende del Pontífice Romano, no habrá órden y la autoridad civil quedará nulificada restableciéndose las prácticas de la Edad Media, segùn las cuales, los reyes, los príncipes y los grandes eran depuestos por el poder elestístico.

No siéndome posible permitir que mi Patria vuelva á las tinieblas de aquella Edad, dicté el Decreto de 3 de setiembre que expulsa, por todo el tiempo que el Poder Ejecutivo lo juzgue indispensable, al Arzobispo Don Ricardo Casanova y Estrada.

El decreto núm. 400 deroga los Decretos Legislativos 137, 149, 150, 152 y 164.

El 137 no hacía más que reiterar la prohibición de imponer ciertas penas abolidas por la civilización moderna.

Tengo el honor de haber dictado el Decreto 341 que prohíbe la aplicación de las enunciadas penas.

El no ha sido abolido, está vigente. Su emisión es uno de los actos que creo me honran y jamás se ha pensado en derogarlo.

Solo hice desaparecer una ley que le hacía sombra, para que se vea que sin esa ley, y solo por el Decreto por mí emitido y por el programa liberal del Gabinete, no se aplican penas que la conciencia ilustrada condena.

Los Decretos 149 y 164 nopedían existir.

Formar el presupuesto de los gastos, corresponde al Gobierno según la Constitución, porque es el único que conoce las necesidades públicas.

A las Asambleas toca aprobar los presupuestos, pero no formarlos.

Por la Constitución el Presidente tiene la facultad de conceder indultos y el Decreto 164 limita esa facultad; es decir priva al Presidente de un poder que la Ley fundamental le otorga.

El *Habeas Corpus* es una garantía constitucional.

La hemos tomado de las leyes fundamentales de los pueblos más libres de la tierra; pero su reglamentación hecha por el Decreto 150 es irregular comovereis en el texto del Decreto mismo.

Deseo conservar esa preciosa garantía y la he conservado en la práctica; pero quiero que su reglamentación sea tan sábia como el principio fundamental que se sostiene; y al efecto el Ministro del ramo en su oportunidad enviará una iniciativa al Cuerpo Legislativo.

Entre tanto, el *Habeas Corpus* se hará efectivo como hasta aquí, mediante la tramitación que establece el Código de Procedimientos en materia Penal.

El Decreto 152 es opuesto á la Constitución.

La Ley Fundamental, en su Artículo 53, atribuye á la Asamblea la facultad de declarar si há ó no lugar á formación de causa contra el Presidente de la República y sus Ministros, y el Decreto 152 otorga esa facultad á la Comisión Permanente.

Ese Decreto confiere á dicha Comisión un poder que la Ley Fundamental le niega.

El contraría el principio de que las leyes no pueden tener efecto retroactivo, por que se dictó *ex post facto* para poder exigir responsabilidades civiles, sin necesidad de antequicio y sin que conste la responsabilidad criminal de individuos que habían ocupado altos puestos.

En todo esto se ve el dominio de la pasión y el deseo de la venganza que jamás deben dominar en las altas cumbres del poder.

El personal del Consejo de Estado no se hallaba últimamente en armonía con el nuevo programa administrativo; y creí de mi deber hacer las subrogaciones que vereis en el Decreto núm. 401.

Con referencia á la Secretaría de Fomento, Os diré que siendo Guatemala un país agrícola, es indispensable proteger la agricultura de una manera resuelta y bien calculada.

Materia es esta que necesita meditación y actividad.

En los pocos días que han corrido desde el 26 de junio se han dictado disposiciones que se creyeron urgentes, las cuales se pondrán en vuestro conocimiento.

Es un principio en Economía que la competencia todo lo mejora y abarata.

Por lo mismo he creido conveniente que varias líneas de Vapores sirvan á nuestro comercio y agricultura.

Se ha inaugurado la del Marqués de Campo; y para que ninguna se halle con privilegios que excluya á las demás, decreté una rebaja del 3 pcto. en los derechos de artículos importados en buques de líneas regulares directas y el 2.⁹₁₀ pcto. en las mercaderías de empresas regulares entre San Francisco California y Panamá.

Se ha subvencionado la Compañía Alemana "Kosmos" con \$1.000 por cada viaje directo entre Europa y nuestros puertos.

La línea férrea entre Escuintla y la Capital, fué como muy bien sabéis, puesta al servicio público el 15 de setiembre de 1884. Sin embargo no había sido recibida, ni se había declarado en vigor el contrato en virtud del cual se construyó.

Se alegaban ciertas deficiencias en la ejecución que no eran provisión de los almacenes de armas y pertrechos.

Entre los Decretos correspondientes á esa Secretaría se encuen-

difíciles de llenar. El Poder Ejecutivo se veía en la necesidad de concluir el asunto y exigió al Superintendente de la Compañía, que subsanara dentro de cierto término las diferencias que resultaran entre los detalles del contrato y la ejecución de la obra, la cual debía sujetarse al juicio de Ingenieros oficiales.

La falta que parecía más notable era que hay puentes de madera en vez de acero y hierro. Pero la Compañía al construir esos puentes no hizo más que accederá comunicaciones del Ministerio, en que se le dijo que hiciera puentes provisionales para que el Ferro-Carril se inaugurara á la mayor brevedad posible.

Sin embargo, aunque los puentes de madera no suponen negligencia en la Compañía, fué preciso exigirle que dentro de cierto tiempo fueran de acero y hierro, y á ello se comprometió sin ninguna dificultad.

Quedó también convenido que de la subvención que el Gobierno debe dar á la misma compañía, se rebajarán \$300.000 que la Empresa tenía ofrecidos. Estando todo esto aceptado, el Ejecutivo declaró en vigor el contrato de 13 de julio de 1880, disponiendo que el pago de la subvención estipulada, se hará en el término de 30 años, en vez de 25 que era lo convenido anteriormente, rebajándose \$50.000 anuales durante los seis primeros.

Al procederse así, el Gobierno no ha hecho más que respetar un Contrato perfecto, consumado por el tráfico del Ferro-Carril desde el año de 1884 y ratificado por el Cuerpo Legislativo.

Era preciso que terminara una situación anómala, que conducia á que desaparciera la obra del Ferro-Carril que tanto favorece y honra al país, quedando aniquilado el crédito del Gobierno á quien justamente habría podido imputársele la falta de cumplimiento de sagrados compromisos.

Tiempo ha que justamente se desea una vía de comunicación que nos ponga en rápido contacto con el mar de las Antillas.

Apenas puede comprenderse que aún se tenga necesidad de ir al Pacífico para buscar el Atlántico, bañando nuestras fértiles costas las aguas del mar Caribe.

Muchos esfuerzos se han hecho inútilmente para obtener esa anhelada vía de comunicación, y ahora tengo el placer de anunciaros que en el Ministerio de Fomento hay en estudio tres proyectos y que es probable que en el año próximo entrante se comience el ferrocarril deseado, que puede terminarse dentro de poco tiempo sin grandes sacrificios para los guatemaltecos.

Teniendo que el pueblo llegara á sufrir alguna carestía de los productos de primera necesidad, hice un pedido de ellos á California para que se expendan al precio de capital y costos y no sufran escasez las clases necesitadas.

Por el Ministerio de la Guerra, se han dado las disposiciones necesarias para mantener y mejorar al Ejercito y para la debida

tra el que lleva el núm. 393 contraido á fijar las excepciones que deben admitirse en el servicio militar.

Es transitorio y dejará de existir cuando á la milicia se dé una nueva organización que se halla en proyecto, en la cual se procurará adoptar en lo posible, disposiciones que han dado grandes resultados en Prusia y otros poderosos Estados.

A la Instrucción Pública se le ha prestado esmerada atención porque ella es la base de la moralidad, del bienestar y del progreso.

Lo que se gasta en Instrucción Pública no es un consumo. Es un capital circulante que vuelve al Estado centuplicando su valor.

Por lo mismo, durante la Dictadura se han creado 25 escuelas primarias.

Se han restablecido 7 suprimidas por los gabinetes anteriores, para hacer economías según se dijo entonces.

Se han nacionalizado 16 y se ha concedido subvención á 26.

En la enseñanza profesional se varió el personal de las Facultades y se aumentó el sueldo de los profesores, porque no podemos tenerlos buenos sin pagarlos siquiera medianamente.

Los planteles de enseñanza, han aumentado en número de 85 y los alumnos en cerca de 4,000.

El que hoy vea los benéficos resultados que produjo la enseñanza que se esforzaron en dar los Gobiernos que emanaron de la Revolución del 71, no podrá menos de desear que no haya decadencia en ese ramo importantísimo y que el Gobierno actual le preste siempre esmerada atención.

Por esto, se han invertido en construcciones y reparaciones de edificios de escuelas \$19.453.

Se han nombrado 11 Inspectores de Instrucción Pública.

Se restableció la tesorería especial para las diferentes Facultades.

Se han repartido libros y útiles, para todo lo cual ha sido preciso hacer algunas erogaciones.

La creación del Sindicado fué una de las disposiciones que más tendian á paralizar la acción del Poder Ejecutivo y sus operaciones eran irregulares, llegándose hasta el punto de que se llevaban libros con un atraso de cinco meses, lo cual dificultaba todo su movimiento hasta el extremo de no poderse cubrir los intereses por falta de los datos indispensables.

Fué preciso, pues, suprimirlo y enseguida se reglamentó la manera y forma con que la Tesorería Nacional debe ejercer las funciones del establecimiento suprimido.

El Decreto de 31 de Mayo del presente año emitido por la Asamblea Legislativa, produjo graves dificultades en el ramo de Hacienda Pública y han sido precisas varias disposiciones para subsanar el mal.

El Ejecutivo no pudo dar el CÚMPLASE al Presupuesto General de Gastos emitido por la Legislatura por ser irregular, y or-

denó que continuara rigiendo el mismo que fué decretado para el año económico que terminaba en Junio del presente año.

Se derogó el Decreto núm. 220 sobre montepíos por tener efecto retroactivo, y por que hacía en consecuencia que se reclamaran y fueran cubiertas cantidades que ni jurídica ni moralmente se adeudaban.

Se estableció un impuesto transitorio sobre la exportación de café, decretándose que mientras el alto precio de ese fruto se sostenga en los mercados extranjeros, se cobrará un peso de exportación sobre cada quintal que se extraiga por cualquier punto de la República.

Con el objeto de fomentar la elaboración de azúcar, se había establecido anteriormente una prima en favor de los exportadores, la cual no produjo el beneficio que se esperaba y gravó al Erario con una nueva erogación.

Por lo mismo creí conveniente suprimir esa prima como lo vereis en el Decreto de 18 de julio.

Los altos derechos de introducción en vez de aumentar las rentas públicas las disminuyen.

Esta verdad no solo la justifican las doctrinas de los economistas, sino el ejemplo de las naciones.

Los excesivos derechos impuestos sobre importación del tabaco produjeron el resultado de disminuir y aun aniquilar las introducciones, mal que ha remediado el Decreto 391 rebajando esos derechos.

Se colocaron los impuestos de ventas de licores extranjeros al nivel de los impuestos sobre venta de licores del país.

Para evitar las defraudaciones de las rentas marítimas se mandó dar exacto cumplimiento al artículo 388 del Código Fiscal; y para completar la estadística de la propiedad inmueble se ordenó la matrícula de los bienes raíces, que aún no están afectos á la contribución territorial.

Con el fin de proteger la industria extractiva, se derogó el Decreto de 30 de abril que dificultaba el laboreo de las minas de carbón de piedra.

Finalmente se decretó el arreglo de la Deuda Pública, señalándose un fondo fijo para intereses y amortización; y se reglamentó la manera de recaudarlo y de verificar los pagos.

Hé aquí, Señores Diputados, un rápido bosquejo que presenta lo que el Poder Ejecutivo ha hecho en el corto período de tres meses. No creo que esté libre de errores porque todo lo humano está sujeto á ellos; pero puedo asegurarlos que á mi Gobierno anima el deseo del acierto, y el anhelo de contribuir al bien, prosperidad y grandeza de nuestra querida Patria.

Guatemala, 1º de octubre de 1886.

M. L. BARILLAS.

MESSAGE

**Presented to the National Constituent Assembly by
General Manuel Lisandro Barillas, President
of the Republic of Guatemala, the
1st day of October 1887.**

Gentlemen Representatives:

MANY are the extraordinary moments which are presented in the lives of nations in which the brightest and most beautiful ideas would fall to the ground were it not that the Executive Authority would be able to have recourse to a sovereignty in order to lend him its help and the benefit of its co-operation.

As is well known, the sovereign power is held by the People before whom we, the authorities all, have to bend our brows.

This sovereignty delegates part of its authority, although never the whole of it, to its representatives, who, congregating in Assemblies edict the laws.

The annals of all nations teach us that ever since the existence of the representative system the holders of power seldom chose to differ with the will of those commanding and to dictate laws which would be in opposition to the interests of the constituents. Guatemala has been in this situation for these last two years.

The reforms which were introduced into the Constitution during the year of 1885 were enacted during hours of political agitation, and the deliberation which is required in a work of such importance could not be had during that epoch.

These difficulties were increased through the Legislature of the previous, as well as of the present year, as these Bodies issued laws which were both unconstitutional and impracticable.

The Executive Power must not be an unlimited one, no more so than any other constituted Authority.

But it is necessary that each and every political power should be invested with such facilities as are indispensable to a useful and dignified fulfilment of its duties.

If the necessary authority to govern is lessened, the existence of an Executive Power is impossible.

The Legislatures to which I refer were annihilating the Government in all its branches, especially in the Department of Finance.

So many were the restrictions imposed upon me that it became impossible to save the national credit which, to my great sorrow I saw hastening, day by day, into deeper complications.

I was aware of the danger without being able to prevent it, surrounded, as I was, by obstacles which seemed to me insuperable.

I understood at last that nothing less than the complete extinction of the effects of the revolution of 1871 would be the result; that it was a question of coercing the men of progress; of sweeping from the political scene the sons of that glorious revolution, in whose ranks I have the honor of counting myself.

My situation was both a difficult and a grievous one.

I am a son of the people and I was being led into a fight against the interests of the people.

My past life, my family, all what nature teaches me to love, belong to the Democracy, and all my surroundings were inciting me to injure this Democracy and to gather together the ashes of the pulverized edifice of thirty years in order to show them up, as if they were not fossils of a time which has gone never to return.

The Republic knew about this abnormal situation, and, through popular action, energetic manifestations were made against the majority of the Deputies.

The people were showing me the course I should adopt, but the Cabinet was opposed and the conflict lingered on.

Such a critical situation could not be of long standing; and, following the impulse of my heart and of my conscience, I effected a complete change of the Cabinet. In its formation the new Ministry understood that not a step could be made without a radical change; dispositions which were impairing the national progress should be made to disappear, and the men who had dictated these dispositions and were urging them on with a firm hand would have to retire from public business.

It was imperative to proceed with dispatch.

It was not for me to leave untouched all the elements of retrocession which were opposing me nor to adopt the lengthened and tedious way of calling together a constituent, taking for my guide the procedure as laid down by the seventh chapter of the Fundamental Law.

With the force of reason and the power of justice I then dictated the Decree of June the 26th., by which the Executive Power assumed the supreme authority and without any dilatory procedure the necessary Constituency was called together.

Confiding in the firmness of my government I left the Capital

for the first time since I assumed the power, in order to visit the Eastern Departments, and everywhere I received demonstrations of goodwill and enthusiasm, being forcibly convinced that my voyage was a continuous ovation.

I recall these facts, not prompted by vanity, but in order to show that the population, in offering these ovations were giving public approbation to my conduct, and, in consequence, to the Decree of June the 26th, and in virtue of which they elected deputies to this Assembly which appears today as a shining star in the planetary system of the public liberties.

It's apparition and the series of popular acts which I am now about to relate are a proof of the sanction given by the people to the Decree of June the 26th. To this Honourable Body, therefore,

I am now bound to explain my conduct and I am going to do so.

By a circular of the respective Ministry, the Diplomatic Corps was apprised of the facts I am referring to, and by an other circular this was notified to the Governments of the other Central-American Republics.

In both of these documents it was specified that the Dictatorship would be transitory, and that during that time the precepts of International Law and existing treaties would be faithfully observed. The Central-American Governments as well as the Gentlemen of the Diplomatic Corps residing in this City answered in a satisfactory manner, with the exception of His Excellency the Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the United States of Mexico, who limited his answer by saying that he would refer the matter to his government and consequently could not recognise the new regime.

Nearly at the same time I received a cable from the General President of the United States of Mexico in which he informed me that Mexico would acknowledge any Government accepted by the people of Guatemala.

This was an homage rendered by this high functionary to the immediate sovereignty which, as you well know, consists in every nation giving itself the form of government which it prefers, without permitting any other government to intervene in the matter.

Guatemala had no official representative who could cause his voice to be heard in Mexico, as our Minister in that Capital, understanding well that he would not be sustained by the new Cabinet, was not called upon to be the mouthpiece in which confidence could be placed.

For this same reason his letters of recall were despatched on the 22nd of June, and there is no notification yet that he has presented the same.

It was not possible to send to Mexico another Representative because the Dictatorship had not been recognized there; but facts

more eloquent than words showed that the people of Guatemala had sanctioned and still do sanction the Decree of the 26th of June. A few difficulties owing more to form than to the foundation have sprung up between Guatemala and Mexico, but it is a satisfaction to me to be able to state that through the kind and spontaneous initiative of His Excellency the Resident Minister of the German Empire in Central-America, an arrangement has been made, the substance of which I shall give an account to the Legislative Power in good time; and to day the Mexican flag salutes you in conjunction with the flags of all the Powers which are represented here.

The relations between Guatemala and the United States of America and with Europe are cordial and friendly, and are looked after with careful attention.

With the view of strengthening the bonds of friendship which unites us with the United States of America, a Minister has been sent to Washington. I am happy to inform you that his reception was most cordial and kind, as was to be foreseen by the intelligent politics of this great people, always favorably disposed towards our nation.

I regard as indispensable the establishment of a permanent Legation in that country, as our Minister will be able to be in contact with representatives of all the countries of the world, some of which are not represented in Guatemala.

Although by the Decree of June the 26th the Executive Power took charge of the supreme power of the Nation, the courts of Justice of the Republic have continued in the full exercise of their duties conforming to the laws in vigor on the 1st of March of this year.

But, as it was impossible that the administrative regime could be upheld, as long as it would count in the judicial Power the same persons who, in this and in the past year, had dictated a number of the impracticable laws which I already have alluded to, it grew necessary to effect the change of those officials as recorded in Decree N° 381.

By this same Decree the 5th Court of Justice resident at Jalapa, was instituted, as it was thought advisable that justice ought to be rendered quickly and thoroughly in that district.

Many civilized Nations grant a free pardon upon those days which commemorate the most glorious achievements of the country.

This practice is in conformity with the principles of the modern penal laws which are aiming to better the culprit and not to the annihilation of that hope of being pardoned which induces the offenders to behave well in their prisons so that they may cooperate with the legislators to the reform of evil customs.

Notwithstanding all this, these pardons must not permit of great

criminals to go unpunished, nor must offended parties be defrauded of their rights. In conformity with these ideas I ordered through Decree N° 382 that pardons were to be granted to those accused and brought within criminal reach from the 30th of June to the 15th of September, provided that the punishment to be inflicted did not exceed simple confinement.

If the punishment were more severe, without exceeding the maximum of the correctional confinement, the pardon was to be limited to half of the time of sentence, and to the fourth part if the punishment inflicted was simple imprisonment.

No pardon has been granted to those under judgment or under sentence of death or the penitentiary.

The Executive Power reserved the right to grant or to withhold pardon according to circumstances.

Pardon was withheld also in cases undergoing examination and in those where it would appear that the accused had been convicted for a similar or another offence.

Within these limits I think that the sublime right of granting pardon reaches the aim which is sought for by public men without degenerating this prerogative into a practice dangerous to society.

In all catholic nations there are frequent controversies between Church and State.

In order to avoid these difficulties in the limit of the possible, monarchs who were called Christians in France, Catholics in Spain, Faithful in Portugal, Apostolics in Austria, have all been put to the necessity of issuing commands that the dispositions of the ecclesiastical authority were not to be published without the approval of the civil authorities.

In conformity with the laws and customs of said nations, article N° 92 of the penal code ordered that every person who in this Republic, gave publicity to briefs, rescripts or orders from the Roman Curacy, propagated or circulated the same, should be punished with imprisonment or with a fine of from three hundred to three thousand dollars.

This law had no other substance than the repetition, although in another form, of the one established in Guatemala before the issuance of the penal code and before the 30th of June 1871.

The Archbishop, Licenciate Don Ricardo Casanova and Estrada tried to establish a new practice, by which he compiled dispositions of the Roman Curacy and published them as emanating from him in edicts printed outside of Guatemalan territory.

This was a violation of article 92 of the penal Code.

As I did not wish to enter into a controversy whether these edicts had been reproduced from pontifical dispositions, or were new rules dictated by the archbishop, I thought convenient in addition to the aforementioned article to forbid the circulation and

publication under whatever form of any dispositions emanating from any ecclesiastical curacy.

Mr. Casanova refused to obey to this law and in a note addressed to the Minister of the Interior on the 2nd of September last, which letter you may have read in print, he said that he protested against this decree and against any vexatious or exacting step that would be taken against him, adding he would consider such as an attack against property and personal liberty and as an abuse of power.

If the nation cannot dictate the laws which it thinks convenient, nor constitute itself according to its own judgment, it is no longer independent.

If in Society there are individuals who are not answerable to the laws, there is no equality.

If, moreover, these men are permitted to incite people to rebellion giving as an excuse that they derive their authority solely from the Roman Pontiff, it will be impossible to maintain order and the civil authority will become a nonentity; the practices of Middle Ages, by which kings, princes and the potentates of the world were deposed by the ecclesiastical power, will once more return.

I could not allow my country to revert to the shadows of said epoch, so I emitted the Decree of September the 3rd by which the Archbishop Don Ricardo Casanova and Estrada was exiled from the country for such time as might be considered proper by the Executive Power.

Decree No. 400 abolishes the legislative decrees Nos. 137, 149, 150, 152 and 164.

Decree No. 137 was the repetition of a prohibition to impose certain punishments which modern civilization has abolished.

I have the honor of having dictated Decree No. 341 which forbids the application of said punishments. It still exists, not having been abolished. Its publication is one of the acts which I believe does me honor, and the thought of abolishing it was never meditated.

I simply repealed a law that had a counter influence in order that the effect of the original law might not be deteriorated or misunderstood; and owing only to the Decree given out by me, and to the liberal program of my Cabinet, punishments which an enlightened civilization condemns, could not any longer be dealt out.

Decrees Nos. 149 and 164 could not remain in force. To establish the estimate of expenses is the business of the Government as accorded by the Constitution, as it alone is sufficient to specify and to stipulate the public wants.

To the Assembly is accorded the right to approve these Estimates,

but not to establish them. By the Constitution the President has the right of granting pardons, and Decree No. 164 limits this right, that is to say it deprives the President of a power which the fundamental Law gives to him.

The Habeas Corpus is constitutional guarantee; we have taken it from the fundamental laws of the most liberal countries of the World, but its regulation as fixed by Decree No. 150 is irregular as you can see from the text of the Decree itself.

I wish to preserve this precious guarantee and have kept it in practice; but I want its regulation to be as well defined as the fundamental principle which sustains itself, and to this effect the Minister of the Department it concerns will present at the proper time an initiatory sketch to the Legislative Body.

In the meanwhile the Habeas Corpus will be in force as at present through the medium of such procedure as defined by the Code in penal matters.

Decree No. 152 is in opposition to the Constitution. In its Article N° 53, the fundamental law gives to the Assembly the faculty of declaring if there be any ground to form a cause against the President of the Republic and his ministers or not, whereas Decree No. 152 gives this faculty to the permanent committee.

This decree gives to said committee a power which is denied it by the fundamental law. It is in contravention to the principle that no law can have a retroactive effect. It was dictated "ex post facto" so as to be able to exact civil responsibilities without the necessity of judging beforehand and without the proof of criminal responsibility of men who had occupied high situations.

In all this can be traced the influence of passion and the thirst for vengeance which ought never to dwell in the higher regions of power.

The persons composing the Council of State have not, lately been acting in harmony with the new administrative programme; and I thought it my duty to make the appointments which are to be noted in Decree No. 401.

Referring to the Department of the Interior, I must inform you that Guatemala being an essentially agricultural country, it is indispensable to protect agriculture in a decided and well considered manner.

This matter will want thoughtfulness and activity.

During the few days which have elapsed since the 26th of June, steps have been taken which were thought to be urgent and which will be laid before you.

It is a principle in economy, that competition betters and cheapens everything.

For this same reason I have thought proper to utilize several lines of Steamers for our trade and our agriculture.

The line of the Marquis de Campo has been opened to traffic, and in order to prevent any one enjoying privileges which would deprive others, I ordered a rebate of 3% on the duties for articles imported by steamers of regular and direct lines and another one of $2\frac{9}{10}\%$ for the merchandise brought by regular steamers running between San Francisco California and Panamá.

The German Co. "Kosmos" has received a subsidy of \$1.000 for every direct trip between Europe and our ports.

The railway line between Escuintla and the capital was, as is well known, put in public service on the 15th. of September 1884, although it never had been officially received, nor had the contract, in virtue of which it had been constructed, ever been declared as being in vigor.

The reasons given for non-acknowledgement were that there still existed certain deficiencies in the details of execution of the line, but these were capable of being easily remedied.

The Executive Power was put under necessity of settling this business and to demand from the Superintendent of the Company that he would repair the differences existing in the details of the contract and the execution of the work, which was to be submitted to the decision of official Engineers in a given lapse of time. The most apparent fault was the construction of wooden instead of iron bridges, but the Company in building these bridges only followed the instructions of the Minister to the effect that they had to build only provisional bridges in order to inaugurate the railway in the shortest time possible.

Any how, although these wooden bridges do not impart the idea of neglect on the part of the Company, it was necessary to request that in a given space of time they would be replaced by bridges of steel or iron, and this the company promised to do without any difficulty.

It was also understood that \$300.000 which were to be paid to the constructors of the road would be deducted from the subvention which the Government has to give to said Company. This being all accepted, the Executive Power proclaimed the contract of July the 13th 1880 to be in vigor, and resolved that the payment of the stipulated subvention would be effectuated in a term of 30 years instead of 25 which had been previously fixed, deducting \$50.000 annually during the first six years.

In acting this way, the Government has done nothing more than to respect a perfect contract, consummated by the traffic of the railroad since the year 1884 and ratified by the Legislative Body.

It was necessary to settle an abnormal situation which was then existing, to the total detriment of railway interests which are a boon and an honor to the country, thereby tending to the

annihilation of the credit of the Government to whom the lack of complying with sacred promises might then have been imputed with justice.

It is a long time since the wish has wisely been expressed to have a rapid way of communicating with the Atlantic Sea by a railway: it is nearly incomprehensible to think that one must go down to the Pacific in order to get around to the Atlantic, our fertile coasts being bathed by the Caribbean Sea; many have been the efforts made in order to obtain this much desired route of communication. To-day I have the pleasure of telling you that in the Department of Public Works there are three projects laid open for study and that in all probability the expected railroad will be begun next year, and that it will be achieved without great sacrifices for the Guatemaltecs.

Having reasons to fear that the people might suffer from the high prices of certain articles of first necessity, I sent for a certain amount of cereals to California in order to be sold at cost price so that the poorer classes would not suffer from scarcity.

The Ministry of War has taken the necessary steps to insure the maintenance and the improvement of the army as well as the due approvisionment of the stores of arms and ammunition.

One of the Decrees referring to this branch is one which, under No. 393, settles the exceptions which must be admitted as regards the military service. This decree is transitory and will cease to exist as soon as the new organization which is now in preparation for the militia will have been put into effect, and for which we will adopt, as far as possible, dispositions which have given great results in Prussia and other great nations.

Great attention has been paid to the public instruction, as it is the basis of all morality, well-being and progress.

What is spent on public instruction is not lost, it is a circulating capital which returns to the State after having increased its value a hundred-fold.

During the Dictatorship 25 primary Schools have been opened, 7 have been reestablished which had been closed by anterior administrations under pretext of making economies, as was said at that time; 16 have been declared national schools and subventions have been granted to 26.

In the professional teaching the personnel of the faculties has been greatly changed and the salaries of the professors have been augmented, as we cannot have good teachers without offering them fair payment.

The elements of instruction have increased by 85 and the pupils by nearly 4.000.

He who sees to-day the benefits resulting from the instruction which the Governments emanating from the Revolution of 1871

have made efforts to give, cannot say less than that there is certainly no decline to be found in this important branch and that the present government devotes towards it its very best attention.

The sum of \$19,543 has been spent by this government in buildings and repairs to schools.

11 Inspectors of Primary Instruction have been appointed.

The Treasury specially appertaining to the different faculties has been reinstated.

Books and useful articles have been distributed for which it has been necessary to make some extra expenses.

The creation of the Syndicate was one of the dispositions which most tended to paralyze the action of the Executive Power; its operations were irregular, these going so far as to neglect the proper keeping of the books for periods up to five months, thus rendering its whole movements so difficult even as to the point of not being able to pay the interest at maturity through the lack of the most indispensable data.

It was found necessary to abolish it and to regulate the way and manner by which the National Treasury could be enabled to replace this abolished establishment.

The Decree of May the 31st of this year given by the Legislative Assembly demonstrated some grave difficulties in the branch of finance and it was necessary to take various steps to remedy the evil.

The Executive Power had not the authority to ratify the general estimate of Expenses as emitted by the Legislature as it was irregular and ordered the one decreed for the fiscal year ending in June of this year to be substituted in its stead.

Decree No. 220 regarding Pensions was abolished as having a retroactive effect, the consequence of it being that sums were claimed and charged which were owned neither lawfully nor morally.

A transitory duty has been established on the exportation of coffee, the decree stating that as long as high prices were maintained by the sale of this berry in the foreign markets, one dollar for exportation would be charged for every hundred weight which might be exported from whatever point of the republic.

In view of fostering the production of sugar, a premium in favor of the exporters had been formerly established, but it did not give the anticipated benefits and was weighing heavily upon the exchequer with another expense. I consequently abolished this premium as you will see in Decree of 18th of July.

The high duties on importation were diminishing the public income instead of augmenting them; the doctrines of the economists as well as the example of nations tend to prove the truth of this assertion.

The excessive duties imposed upon the importation of tobacco brought forth the consequence of diminishing and nearly destroying the imports, which evil was stopped by Decree N.^o 391 through

its reducing these duties.

The duties on sale of foreign liquors were on the same level as those established on the sale of liquor made in the country. In order to prevent the frauds on the maritime income I enforced the rigid execution of article 388 of the fiscal code, and to complete the statistics of immovable property I ordered the matriculation of immovable property which, up to this time, had not yet paid any land tax.

In view to help the mining industry, I abolished the Decree of April the 30th which rendered difficult the working of the coal mines.

In fine I ordered the settlement of the Public Debt, fixing a set sum for the payment of interest and amortizement as well as the way to collect it and to verify the payments.

This, Gentlemen Deputies, is a rapid sketch representing what the Executive Power has done during the short period of 3 months. I do not believe that it is free of errors because every thing human is subject to them, but I assure you that my Government has been animated by the wish to do well and the eagerness to contribute to the welfare, the prosperity and the greatness of our beloved country.

Manuel Lisandro Barillas.

Guatemala, 1st of october 1887.